

Emili Boix-Fuster

**25 años de la Constitución Española.
Las ideologías lingüísticas en la configuración
del Estado español**

1. Introducción

Al conmemorar los veinticinco años de la Constitución Española podemos percibir mejor sus luces y sus sombras. Es innegable que desde 1978 ha habido una mejora en los derechos individuales y sociales en España, es innegable que se ha desarrollado cierta descentralización. Sin embargo, hay el tema pendiente de la acomodación del pluralismo nacional, cultural y lingüístico internos. Recordemos que esta descentralización española es bastante limitada: la única citación del federalismo en la Constitución Española es para prohibirlo. Ferran Requejo recordaba recientemente (2004: 143-147) que hay seis cuestiones pendientes si se pretende realmente construir en España una democracia federal avanzada en una realidad plurinacional:

1. el reconocimiento formal de Cataluña, de Euskadi y de Galicia como realidades nacionales diferenciadas,
2. la protección y ampliación del autogobierno,
3. la regulación de la inmigración, que tenga en cuenta los intereses diversos de las comunidades autónomas,
4. la representación en Europa de dichas comunidades autónomas,
5. el financiamiento autonómico, y, sobre todo,
6. la profundización de la defensa y promoción del triángulo lengua-educación y medios de comunicación de masas en todas las lenguas de España, sobre todo aquellas más frágiles.

A continuación presentaremos un balance del último aspecto, tanto de las ideologías lingüísticas en España como del desarrollo plurilingüe del marco político español. Empezaré con tres citas que enmarcarán mi intervención.

Una lengua no es toda la sociedad pero es el elemento central de su bóveda. Depósito de siglos, patrimonio de convivencia, marco de cultura, el idioma es eje y continuidad para la vida de un pueblo, en tanto que pueblo. Escindida, bastardeada o perdida la lengua, la sociedad se rompe, se corrompe o ve borrarse sus contornos diferenciados. Las comunidades que nunca han sufrido una crisis idiomática fuerte raramente se dan cuenta de esto: nadie tiene conciencia de la salud, dicen, sino el enfermo (Fuster 1962: LX-LXI).

Con esta primera cita Joan Fuster, el gran ensayista valenciano, resumía la desazón, la angustia incluso, con la que los pueblos que ven amenazada su lengua, viven esta experiencia y sobre todo destacaba la dificultad que tienen los pueblos monolingües para entenderla.

Rien ne marque d'avantage la grandeur d'un Empire, que la multitude des nations et langues qu'il embrasse (Leibniz, *Projet de lettre à Lefort le Jeune*. Citado por Prat de la Riba 1918: 52).

Mediante la segunda cita, quisiera insistir en que es conciliable el desarrollo económico y social con el reconocimiento equitativo y justo del plurilingüismo de los ciudadanos, tal como demuestran los casos suizo, finlandés o canadiense. No hay razones para pensar que el caso español no pudiera ser también, como lo fue en su terreno su transición política, un ejemplo de este reconocimiento de la diversidad lingüística.

Que Dios me de la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las que puedo y sabiduría para ver la diferencia.¹

Con la tercera cita, quisiera poner hincapié en que el problema que aquí tratamos, el de la organización lingüística del estado, tiene solución si hay simplemente voluntad y medios para ello.

Mi exposición se desarrollará del siguiente modo. En primer lugar describiré brevemente la situación sociolingüística del área catalanohablante. En segundo lugar presentaré el panorama del multilingüismo español. En tercer lugar recordaré el marco legal actual de dicho plurilingüismo. En cuarto lugar explicaré con cierto detalle las dos principales posiciones ante el multilingüismo español: la prioridad del español como lengua común o la igualdad entre todas las lenguas españolas. Finalmente, y en quinto lugar, desarrollaré la reivindicación de extraterritorialidad para las lenguas no castellanas, refiriéndome como

1 Nieburs, Reinhold/Oettinger, Friedrich: "Estas tres cosas", s. XVIII.

caso comparativo a la experiencia plurilingüe de la confederación suiza.

2. Un análisis de la situación sociolingüística desde el área catalanohablante

Examinaré la estructuración del Estado desde la perspectiva de los países de lengua catalana y, particularmente, desde Cataluña. Para ello empezaré resumiendo los grandes trazos de su situación sociolingüística. Me serviré, siguiendo a Branchadell (2003), de seis peligros, todos ellos que empiezan con *d*, que acechan a la lengua catalana en todo su territorio de Valencia, Cataluña y las Islas Baleares. Se trata de los peligros de degradación, de desaparición, de desmovilización, de disgregación, de división y de devaluación.

El riesgo de degradación o dialectalización se refiere al peligro de que el catalán pierda sus formas genuinas, a causa del contacto intensísimo con la lengua dominante, el castellano, o, aun de un modo más acusado, con el francés.

El riesgo de desaparición alude a la posibilidad de que los catalanohablantes dejen de usar la lengua y, principalmente, dejen de transmitirla intergeneracionalmente. Este abandono es lo que ya ha ocurrido en las grandes ciudades valencianas, empezando por Alicante y Valencia y acabando en Castellón, y lo que ha sucedido más recientemente en Palma de Mallorca. En todas estas zonas las parejas lingüísticamente mixtas acaban eligiendo la lengua castellana en las relaciones con los hijos. En Cataluña, en cambio, el catalán parece resistir mucho más. En la reciente encuesta de usos lingüísticos de 2003, respuesta por mayores de 15 años, el catalán era lengua primera de un 40,4% de la población al lado de 53,5% el castellano y un 2,8% que optaba por las dos lenguas. En cambio en cuanto a la lengua que consideraban propia, el catalán recuperaba posiciones: un 48,8% elegían al catalán, un 44,3% al castellano y un 5,2% a ambas lenguas.

El tercer riesgo o problema que acecha la lengua catalana es el de la desmovilización, es decir, el abandono masivo de la militancia lingüística lo cual podría acentuar todos los demás peligros.

El cuarto riesgo es el de la disgregación o fragmentación bajo fuerzas centrífugas, manifestado sobre todo por el movimiento sece-

sionista en Valencia (véase sobre el reciente estado de la cuestión Esteve et al. 2005).

Un quinto riesgo es el de la división interna de los territorios de habla catalana, en que los *cleavages* o fronteras culturales y lingüísticas se convirtieran en límites políticos, o, mejor dicho, politizados. La sociedad de Cataluña ha evitado este riesgo, a pesar de que ocasionalmente han saltado las luces de alarma. Existe un considerable consenso sociolingüístico en la sociedad catalana, que redundo en un apoyo mayoritario al proceso de recuperación de la lengua, con cierta preferencia, no exclusividad, del catalán, tanto por parte del actual gobierno tripartito (PSC-PSOE, ERC, ICVVerds) como por parte del ejecutivo anterior (CiU), mientras el PP, el único grupo contrario al proceso de normalización lingüística, ocupa una posición marginal.

Finalmente el sexto problema o riesgo es el de la devaluación, es decir el riesgo que no se logren o se pierdan las funciones prestigiosas o cultas, que dan seguridad sociopolítica a la lengua. Si una lengua no se usa normalmente en la administración, en la docencia, en los ámbitos públicos acaba adquiriendo (en un circuito cerrado infernal) connotaciones negativas, rústicas, retrógradas.

El tema central de esta exposición –un balance de los 25 años de la CE– gira precisamente entorno a una de las funciones que toda lengua occidental aspira a lograr: su empleo en los órganos centrales del estado de que forma parte. No es coincidencia que sea Cataluña, desde donde se haya reclamado más este reconocimiento tanto español como europeo de la lengua. La misma seguridad y tradición movilizadora en pro de la lengua en Cataluña explica que se aspire, como es el caso de muchas otras lenguas oficiales de dimensiones similares, a funciones oficiales de ámbitos superiores al autonómico. Cataluña constituye la vanguardia de las reivindicaciones lingüísticas en España sin lugar a dudas. Ya Joshua Fishman, el patriarca de la sociolingüística internacional, en 1991, destacaba el peso del multilingüismo en España y el papel decisivo que en él ha jugado Cataluña:

Frecuentemente se ha olvidado (o completamente desconocido) que, después de la Unión Soviética, España constituye el país multilingüe desarrollado económicamente más poblado en el mundo y el Estado multilingüe más antiguo en el mundo, siendo incluso anterior a la confederación suiza en este tema. En modo similar, se ha olvidado y se ha valorado poco que la contribución catalana a ambas circunstancias es y ha sido la principal (Fishman 1991: 299).

3. Un breve panorama del multilingüismo español

Estas previsiones de Fishman son especialmente ciertas si consideramos el porcentaje de la población española que vive en territorios con doble oficialidad: entorno a un 40% del total de la población española habita en dichos territorios. Destaquemos que la minoría más importante es la población del área catalanohablante con un 27% del total de la población española. Incluso rebajando este porcentaje a los que usan habitualmente las lenguas españolas no castellanas, se supera el 20% de la ciudadanía española, un porcentaje similar al de los francófonos en la Suiza actual.

La pregunta que nos planteamos es cuál ha sido el reconocimiento de esta realidad multilingüe en estos veinticinco años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978 y sobre todo hacia donde tendría que orientarse en un futuro próximo este reconocimiento para que la diversidad interna española fuera tratada de un modo justo y satisfactorio.

Para empezar conviene recordar en qué situación se encuentra el complejo multilingüismo peninsular, muy distinto en cada zona lingüística. Como es harto conocido no tiene nada que ver la situación del vasco en zonas de Alava, oeste de Vizcaya o sur de Navarra, con un papel marginal o nulo de dicha lengua desde hace siglos, con la situación de mayoría social clara del catalán en la Cataluña o la Mallorca centrales, donde la lengua propia, como sentenciaba rasa y simplemente uno de los primeros clásicos de la sociolingüística catalana es “la lengua del pueblo” (Reixach 1975), prácticamente la lengua de todo el pueblo. Haciendo abstracción de esta gran diversidad entre las diversas zonas multilingües españolas, que aun aumentaría si tuviéramos en cuenta las pequeñas lenguas peninsulares como el astur-leonés, el aragonés o el occitano del Valle de Arán (Turell 2001), creo ajustada y correcta la perspectiva sociolingüística que esbozó el sociólogo Juan José Linz, el año 1975 (el año de la muerte del dictador con la cual se abre el proceso democratizador español que nos ha conducido a la situación actual). En aquel momento, Linz sintetiza muy bien tres rasgos simultáneos del multilingüismo español:

En primer lugar Linz constata el fracaso del asimilacionismo lingüístico español. La lengua dominante, el español, a diferencia de lo ocurrido en la vecina y jacobina Francia, a diferencia incluso de lo

sucedido en la más tolerante y regionalizada Italia, no ha logrado convertirse en la única lengua, sentida como propia por todos los ciudadanos españoles. En Orense, en Guipuzcoa, en Lérida, en Valencia, en Mallorca, muchos hablantes con pasaporte español tienen como lengua primera e incluso principal el catalán, el gallego o el vasco. El nacionalismo español, como ha relatado tan claramente Álvarez Junco (2002) respecto al siglo XIX, no logró, por impotencia, por el mayor desarrollo industrial relativo de las zonas multilingües (Cataluña y País Vasco) imponerse ante los movimientos particularistas que fueron, sobre todo en dichas dos zonas, a la vez modernizadores. Este desarrollo, lo lamentaba de este modo Américo Castro en *Cataluña ante España* (1930):

Hay que partir del hecho –del dolor, no me asusta decirlo– de que la lengua más importante de la nación no haya podido convertirse, como el francés, en el común denominador, amado y respetado de todas las culturas españolas (Castro 1930: 297).

En segundo lugar, Linz constata con razón que el castellano o español se ha convertido en la lengua franca peninsular. Los movimientos de recuperación lingüística, especialmente vigorosos en Cataluña y el País Vasco, no han logrado (y sólo aspiran a ello sectores minoritarios) volver a ningún tipo de monolingüismo. A lo sumo, como ocurre especialmente en Cataluña, se ha aspirado e implementado un bilingüismo asimétrico que intenta dar preferencia a la lengua histórica o propia del territorio. Encontramos pues en Cataluña un uso oficial claramente preferente de la lengua propia (en la administración local o autonómica) pero no un uso único o exclusivo que no está contemplado por nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Los grandes cambios demográficos del siglo XX, empezando por las grandes migraciones hacia el País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Valencia, como también hacia Madrid, los cambios comunicativos con la difusión del castellano a través de la televisión, la radio y el sistema escolar, las dos dictaduras del siglo XX (la de Primo de Rivera y la de Franco) que ambos prohibieron el uso público y oficial de las lenguas no castellanas, acabaron de extender la difusión del español. Esta difusión, sin embargo, no ha comportado necesariamente el abandono de la lengua primera, del mismo modo que puede ocurrir, en un futuro no muy lejano que el inglés se convierta en lengua conocida por todos los europeos sin que ello comportara la dejación ni la subordinación de

las primeras lenguas de cada zona lingüística del continente. Contemplamos pues una situación que podríamos denominar *de empate*, en términos futbolísticos, que no es de dominio absoluto de ninguna de las lenguas en contacto. El mismo *Partido Popular*, el gran partido español más reticente ante el avance de las lenguas propias, parece aceptar, al menos nominalmente, el plurilingüismo estatal (Marcos Marín 1995: 13):

la actitud del monolingüe castellano que rechaza la riqueza cultural de una España plurilingüe es tan anticonstitucional como la de quien pretende la sustitución del castellano por otra lengua de España en una determinada Comunidad Autónoma.

El mismo experto, sin embargo, matiza que el español ha de ocupar el primer lugar en la jerarquía lingüística, ha de gozar de ventajas como lengua común e insiste en que se ha de asegurar su dominio, como si en alguna zona no se diera este dominio:

En el caso español el límite es sencillo: hay una lengua común para todos que es además lengua internacional de primer orden. No se puede privar a los ciudadanos de esa ventaja (Marcos Marín 1995: 56).

Esta posición coincide con el denominado internacionalismo lingüístico que propugnó Juan Ramón Lodares, según el cual lo que primaría en los conflictos de lenguas serían únicamente los criterios instrumentales, lo cual conllevaría el abandono de las lenguas pequeñas en favor de las mayores (“de los caminos de carro en favor de las autopistas”, véase el alegato en sentido contrario de Albert Branchadell, *El País*, 29.03.2005). No se observa, pues, entre los representantes del partido conservador o en los sectores alegados una actitud compensatoria de la grave inseguridad social con la que se enfrentan las lenguas no castellanas. Aun menos se observa una visión normalizadora que aspirara a terminar con la interposición cultural que tanto caracteriza la minorización lingüística. Muestra de ello es la política lingüística del *Partido Popular* en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. Precisamente se aspira a lo contrario: se espera que las comunicaciones exteriores del grupo no castellano se realicen exclusivamente en castellano.

Finalmente, en tercer lugar, Linz (1984) señala entre otras consideraciones, que este panorama sociolingüístico comportará la exigen-

cia del bilingüismo en las zonas no castellanas, lo que conllevará posibles conflictos y limitaciones para la población monolingüe:

El bilingüismo, independientemente de un nacionalismo excluyente, creará barreras a la movilidad interregional (excepto en las actividades industriales menos calificadas) y barreras a la movilidad ascendente de los inmigrados y de sus hijos, sólo superables con el tiempo, dando lugar a una estructura social segmentada (Linz 1984: 71).

Esta advertencia de Linz encaja con la visión del plurilingüismo que tendrán los liberales españoles, como vemos a continuación.

4. Las ideologías ante el plurilingüismo español

Presentaré las principales concepciones ideológicas con las que se aborda la diversidad lingüística española. La primera, en orden de aparición y en vigencia desgraciadamente, ha sido la concepción asilimilista. Dejaremos de lado los intentos de prohibición en ámbitos públicos y privados que han caracterizado al siglo XIX y a las dos dictaduras del siglo XX. Dejaremos de lado las muestras de intolerancia más recientes como los silbatos del público de la plaza de Las Ventas de Madrid (10.11.1997) contra el cantante de Xàtiva, Raimon, por el mero hecho de hablar en catalán.

4.1 La ideología asilimilacionista

El fragmento de Laguna en su *Historia Universal* (1836), que data de la primera mitad del siglo XIX, representa la visión asilimiladora dominante:

El referir la historia de todas las lenguas que se han usado en España desde que llegaron los charlatanes de Babel, sería una cosa demasiado prolija y aventurada y así sólo diremos que nuestra lengua castellana es la más rica, la más sonora, la más amena, la más elegante, la más expresiva, la más graciosa, la más melodiosa y la más adecuada, en fin, para expresar conceptos de cualquier categoría. Este idioma se habla en toda la península a excepción de Portugal donde se habla el portugués, de las provincias Vascongadas y Navarra donde se habla el vascuence y de Cataluña y Valencia en donde sigue la lengua limosina: *aunque se está trabajando por desterrar* de la Península tales idiomas (si pueden llamarse así) y uniformar todas la provincias en el uso del idioma común (Laguna 1836: 19, énfasis mío).

Un asilimilacionismo más suave, pero asilimilacionismo al fin y al cabo, es el que formulaban tanto el gran intelectual vasco, Miguel de Una-

munio, como una muestra de estudiantes de secundaria de Salamanca, un siglo después, que respondieron a una encuesta sobre la diversidad lingüística en España.

Es en nombre de la cultura, no sólo del patriotismo, es en nombre de la cultura como debemos pelear por que no haya en España más lengua oficial, más lengua de cultura nacional, que la lengua española que hablan más de veinte naciones. Y esto, sean cuales fueren las hermosuras, los méritos y las glorias de otros lenguajes españoles, a los que se debe dejar a su vida doméstica (Unamuno 1906 según González Ollé 1993: 145).

Por su lado los estudiantes de Salamanca, encuestados en 2002 (Beller 2005) manifiestan generalmente una actitud mal informada, reticente o asimilista ante las lenguas no castellanas de España, si no puro desinterés.² Un 53% creen que, como estamos en España, todos tenemos que hablar español. Un 38% creen que los catalanes hablan su lengua con el propósito de diferenciarse y porque se creen superiores. Un 76% creen que conviene que haya una lengua dominante y que ésta sea considerada más útil en todos los territorios. Un 50% afirma que el catalán es un dialecto. Un 78% afirman que se pueden respetar las otras lenguas, pero teniendo en cuenta que la lengua prioritaria es el castellano y, como tal, debe tener privilegios.

4.2 La ideología liberal asimilacionista

La visión de Linz es la de un liberal español que lamenta que esta diversidad lingüística limite la movilidad interna española. En realidad Linz se hace eco, con matices, de la vieja idea liberal de que una mínima homogeneización sería indispensable para la eficacia de un estado moderno. Así lo enunciaba un ilustre presidente de las Cortes de Cádiz (Ramón Lázaro de Dou y de Bassols 1801):

En qualquier estado se ha de procurar que haya una lengua dominante en el país para la enseñanza, expedición de órdenes y para todo cuanto se haya de hacer correspondiente al derecho público (lo cual) trae muchas

2 “¿Qué nos separa a los españoles?”, pregunto a una chica que viaja a Valencia. Respuesta: “Los distintos idiomas. En Valencia, por ejemplo, cuando hablan valenciano yo no los entiendo.”
P: “¿De dónde eres?”
R: “De Soria. Estudio Ingeniería Química.”
P: “¿Por qué no aprendes valenciano?”
R: “No tengo tiempo para esto.” (*La Vanguardia*, 14.03.2004).

ventajas en qualquier nación el tener una lengua dominante en dicho modo.

La primera es que facilita mucho el comercio interior, porque no tiene duda que la dificultad de explicarse y de entenderse unos a otros entre personas de diferentes reynos y provincias ha embarazado y embaraza en muchas partes el comercio; este impedimento que es insuperable entre distintas naciones, es fácilmente vencible entre distintas provincias de una misma nación, especialmente si se usa para ello medios suaves, no dirigiéndose tanto las providencias a destruir las lenguas que estén en uso como para introducir con fina prudencia el de la que ha de quedar dominante.

La segunda es que hablarse en todo el reyno una misma lengua cria en el ánimo de todos un género de afecto y amor particular que no puede fácilmente encontrarse entre los que hablan diversas lenguas, verificándose en estos que se miran en el algún modo como si fuesen de reyno distinto, sin embargo de formar el mismo.

La tercera es que proporciona que el conocimiento de los adelantamientos que se hacen en algún lugar se comuniquen a los otros resultando de esto en alguna parte la ventaja que se ha dicho de la lengua latina (Lázaro de Dou y de Bassols 1801; en Cano 2002: 168s.).

De modo similar lo enunciaba John Stuart Mill en 1861:

Las instituciones libres son casi imposibles en un país compuesto de diferentes nacionalidades. En un pueblo sin sentimiento común, especialmente si lee y habla distintos idiomas, no puede existir una opinión pública unida, necesaria para que funcione el gobierno representativo (1947: 361).

Esta visión liberal clásica confunde la igualdad de características (*sameness*), con la igualdad de derechos (*equality*).

En España el conocimiento generalizado del español garantiza la posibilidad de que se constituya un imaginario colectivo español, una *comunidad imaginada* en expresión feliz de Benedict Anderson (1983). El mercado comunicativo en español a través de las televisiones, las emisoras de radio, la prensa diaria, las revistas del corazón, la simbología nacional, permite a los ciudadanos españoles imaginarse como partes de un todo común superior, a pesar de que no tengan contacto directo y cotidiano con cada uno de los compatriotas, miembros también de esa comunidad. La comparación de los mercados comunicativos de la Cerdaña Norte y la Cerdaña Sur proporciona un ejemplo evidente de los efectos de pertenecer a dos estados distintos, Francia y España respectivamente. El español es omnipresente y consigue las características de la anonimidad: la neutralidad y el intercla-

sismo (Woolard 2004). Los datos de los que disponemos demuestran que no hay razones para preocuparse por la difusión del castellano en España, ya que tiene una vitalidad social muy asegurada, pero sí para inquietarse por las otras lenguas españolas en una sociedad capitalista y globalizada, en la que, aparte de los tristes casos de pura intolerancia lingüística, las razones estrictamente utilitarias favorecen inevitablemente a una de las lenguas globales, enfrente de lenguas de dimensiones reducidas. En este contexto se puede sacar a colación la frase conocida de que el lobo y la gacela pueden dormir juntos, pero la gacela no dormirá nada tranquila.

5. El marco legal del plurilingüismo español actual

La Constitución Española representó un avance positivo pero insuficiente respecto a la larga retahíla de constituciones españolas que obviaron la diversidad lingüística. Ya en su preámbulo la Constitución Española establece la voluntad de la Nación de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Ya en el título preliminar de la Constitución se diseña, mediante el famoso artículo 3, una territorialidad desigual, ya que se reconoce la oficialidad del castellano en todo el territorio mientras se restringe la de las demás lenguas españolas (no denominadas) a los ámbitos respectivos de las Comunidades Autónomas. Los tres apartados de este artículo 3 parecen establecer una gradación de reconocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas españolas. Así, en el apartado 3.1. se establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, obligación insólita en el derecho comparado internacional. En el apartado 3.2. se hace referencia a las demás lenguas españolas que “serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Cada Estatuto, y las leyes que lo desarrollen desde cada gobierno autónomo han modulado esta oficialidad, la cual ha sido cercenada o aprobada, como veremos, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta competencia autonómica se apoya en el artículo 148.17. que establece que “las Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias en el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua en la Comunidad

Autónoma.” Finalmente en el apartado 3.3. se establece muy genéricamente que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. De este modo parece establecerse una jerarquía entre las lenguas (artículo 3.2.) que se normalizan, y las modalidades que simplemente se conservan (artículo 3.3.). Finalmente cabe destacar, por su repercusión social, el artículo 20.3. referido a los medios de comunicación:

La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Recordemos que la regulación de las televisiones privadas el 1989 no tuvo en cuenta el pluralismo lingüístico.

El Estado se establece como garante de la realidad plurilingüe del Estado, como ha establecido también la sentencia del Tribunal Constitucional 56/1990 que la califica “de considerable importancia, simbólica y afectiva en la estructuración autonómica del Estado”.

Por consiguiente, como resumen, Vernet y sus colaboradores en una síntesis reciente de derecho lingüístico (2003), España es un Estado compuesto con división de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La política lingüística está distribuida del siguiente modo:

- 1) La materia lingüística no se encuentra en la relación de competencias reservadas al Estado.
- 2) Cada comunidad autónoma determinará el alcance y objetivos concretos de su política lingüística, dentro del marco constitucional y lo que vaya estableciendo el Tribunal Constitucional.
- 3) La competencia en temas lingüísticos es transversal. El alcance y los efectos de la oficialidad serán aplicados por la administración estatal, autonómica, local, universitaria y judicial. La medida en que cada una de estas administraciones la apliquen nos indicará su grado de implicación en pro o en contra de la diversidad lingüística.
- 4) Las normas se aplican a todo el territorio de la Comunidad Autónoma, no sólo a la administración autonómica.

- 5) Las prescripciones autonómicas tienen aplicabilidad inmediata. Las administraciones no autonómicas desarrollan la Constitución y el Estatuto de Autonomía respectivos.

La política normalizadora ha comportado la bilingüización de parte del personal estatal y una cierta preeminencia en el caso del catalán en el sector educativo. Diversas sentencias del Tribunal Constitucional han dado el visto bueno a ambos aspectos. Por un lado la *STC 46* de 1991 consideraba ajustado a derecho el artículo 34 de la *Ley de Función Pública de Cataluña*. Por su lado, la *STC 337* de 1994 reconocía las competencias plenas en materia de enseñanza de la Generalitat de Catalunya, así como el carácter “central” que ocupaba la lengua catalana en todo el ámbito educativo no universitario.

A veces el encaje entre la normativa lingüística del gobierno central y la del autonómico es complejo o, mejor dicho, conflictivo. Como señala un reciente libro blanco de la situación sociolingüística en los países de lengua catalana,

[I]a legislación estatal no respeta los mandatos de las leyes de política lingüística dictada por las comunidades autónomas, en cuanto al principio de lengua propia. Peor aun, los operadores estatales vulneran cotidianamente hasta el contenido de la oficialidad de la lengua catalana y los derechos lingüísticos de los ciudadanos que se derivan de ellos (Pons/Vila 2005: 111).

Así el artículo 2.2. de la *Ley de Política Lingüística* catalana de 1998 establece que el catalán, como lengua propia, es la lengua preferentemente usada por la Administración del Estado en Cataluña, en la forma que ésta determine. En cambio, el artículo 36 de la *Ley estatal 30/1992*, sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo establece como principio general la lengua castellana como lengua de los procedimientos tramitados por la administración general del Estado, aunque prevea explícitamente que cuando el procedimiento es a instancias de una persona interesada y ésta utiliza otra lengua oficial distinta de la castellana, entonces el procedimiento se ha de tramitar en la lengua elegida por esta persona (artículo 36.1.). Así mismo el *Real Decreto 1465/1999* del 17.09.1999 establece criterios de imagen institucional y regula la producción documental y el material impreso de la administración general del Estado, norma que establece el bilingüismo como regla general en el material impreso, modelos normalizados, carteles, rótulos y señalizaciones

destinados a los ciudadanos, de tal modo que la lengua propia no aparece como preferente. En general existen escasas exigencias de capacitación lingüística para el personal de la administración estatal de tal manera que “la administración del Estado convierte el ejercicio de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en un motivo de conflicto interpersonal” (Pons/Vila 2005: 112). Finalmente cabe recordar que la Administración de Justicia, aun muy centralizada, continúa siendo un sector inexpugnable a la normalización lingüística: su configuración ha blindado la posición de los castellanohablantes monolingües, de tal modo que los derechos de los ciudadanos catalanohablantes quedan muy limitados.

6. Dos posiciones contrarias ante el multilingüismo: la prioridad del español como lengua común o la igualdad radical entre todas las lenguas españolas

En una formulación más dura, la posición programática de intelectuales próximos al *Partido Popular* propugna que el español bastaría para todo tipo de comunicación interterritorial, como “lengua común, única que les (a los niños y niñas de las zonas bilingües) garantiza la igualdad de oportunidades en todo el territorio español” (Marcos Marín 1995: 11). En la jurisprudencia española encontramos la formulación de esta visión unitarista. Se llega a considerar lógico que de la idea de lengua común se derive el uso del castellano para todos los españoles, sin tener en cuenta la opinión de estos mismos ciudadanos. Así constó en una resolución (*Boletín Oficial del Estado*, 22.11.1985) de la dirección general de los Registros y del Notariado, dependiente de la administración central. En ella se daba respuesta a dos recursos presentados por un ciudadano catalán en los que éste solicitaba que los asientos de una inscripción de nacimiento fueran en catalán y que los apellidos del nacido aparecieran unidos con la conjunción copulativa catalana, la *i* latina, en lugar de la castellana, la *y* griega. Dos aspectos son significativos de la resolución denegatoria.

En primer lugar se arguye que el Estado central no puede ser bilingüe:

Cuarto. Cuestión completamente distinta es la que si en un futuro podría o no ser conveniente que los órganos competentes del Estado implantaran un bilingüismo, que no parece compaginarse bien con el carácter estatal del Registro Civil ni con su eficacia nacional e internacional [...].

De este modo se equipara estatalidad con monolingüismo castellano, dando un predominio desigual a dicha lengua. En segundo lugar, aun más interesante, se argumenta que el uso del castellano no es discriminatorio, de tal modo que se antepone la preferencia de la administración a la del administrado:

Sexto. Ningún atisbo de discriminación puede existir por el hecho de imponer a un español el uso del castellano, ante el deber de conocer esta lengua establecido para todos los españoles por el artículo 3.1. de la Constitución.

Recordemos, antes de seguir adelante, dos aspectos: por un lado, la Constitución Española no denomina al español lengua común; por otro lado, las otras lenguas españolas también podrían considerarse comunes entre Comunidades Autónomas. Así, el euskera o vascuence es común a Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el catalán es legalmente común a Cataluña y a las Islas Baleares, e incluso a la Comunidad Valenciana, si aceptamos como reconoce la misma *Academia Valenciana de la Lengua* en su decreto de constitución de 1998, que la variedad allí hablada pertenece al mismo grupo lingüístico que el catalán.

Esta política de priorización del castellano-español contrasta con la de un representante de un partido clave en el juego político catalán actual, el *Partido de los Socialistas de Cataluña* (PSC-PSOE), un partido independiente, pero federado al PSOE, que manifiesta claramente estar dispuesto a un uso instrumental, si fuere necesario del español, pero prefiere comunicarse con la administración (una administración que aspira a que sea federal) a través de su lengua propia, el catalán.³

3 Un precedente de este planteamiento lingüístico igualitario se encuentra en Ninyoles (1977) en plena transición política española: En aquel período, la ideología alternativa a la asimilacionista, venía vinculada con aspiraciones de transformación socialista del estado. Era ésta la visión de Rafael Lluís Ninyoles que, desde la periferia, aboga por un cierto predominio de las lenguas no castellanas, para así compensar su subordinación histórica, al lado de un respeto escrupuloso de las nuevas minorías castellanohablantes del territorio: “Quizá la alternativa más coherente implicaría la instrumentación de un modelo de unilingüismo territorial en las regiones autónomas, combinado con garantías eficaces respecto a los sectores de habla castellana sobre la base de unos derechos lingüísticos personales, e inserto en un programa socialista capaz de asumir una transformación cultural democrática y de instaurar una relación de auténtica coigualdad y reciprocidad entre

Evidentemente, este futuro federalismo no puede ser verdad si no está hecho en libertad, si no está hecho en igualdad, e incluso, ¿por qué no?, con el contenido fundamental de la fraternidad. Que no se hable de bilingüismo en Cataluña, si no se habla de bilingüismo en todas partes. Porque en Cataluña, es interesante y útil que los catalanes sepamos, o podamos utilizar el castellano cuando sea conveniente. Lo que hay que reconocer es que también el Estado, si quiere ser el Estado de todos, tendría que pensar que un ciudadano de Cataluña no tiene por qué hacer la comedia de dirigirse al Estado en una lengua que no es la suya. Mientras sea así, el Estado nos parecerá siempre un estado extranjero (Cirici Pellicer 1983: 168).

Esta reivindicación del plurilingüismo del Estado es una ya vieja melodía que ya cantaron los poetas y que han llegado demasiado a menudo a oídos sordos. No quiero recordar hoy viejos agravios, episodios no tan lejanos de intolerancia lingüística. Prefiero hoy recordar la *Oda a la patria* de Joan Maragall, abuelo del actual presidente de la Generalitat de Catalunya, cuando reclama, dramáticamente incluso, un diálogo peninsular.

Escucha España – la voz de un hijo
que te habla en lengua no castellana,
hablo la lengua que me regala la tierra áspera
en esta lengua pocos te hablaron
hartos en la otra
[y que acaba así:]
¿Dónde estás, España? – no logro verte.
¿No te hiere mi voz atronadora?
¿No entiendes esta lengua – que te habla entre peligros?
¿No sabes ya comprender a tus hijos?
¡Adiós, España! (Maragall 1970: 171s.)

Y Salvador Espriu, otro gran poeta catalán, lanza una invocación al diálogo, dirigida a Sepharad, España, en la versión de José Batlló:

Recuerda esto siempre, Sepharad.
Haz que sean seguros los puentes del diálogo
E intenta comprender y amar las diversas razones y
las hablas de tus hijos.
Que la lluvia caiga lentamente en los sembrados
Y pase el aire como una mano extendida,
Suave y benigna, sobre los anchos campos.

las distintas comunidades de un Estado español multilingüe” (Ninyoles 1977: 258).

Que Sepharad viva eternamente
 En el orden y la paz, en el trabajo,
 En la difícil y merecida
 Libertad (Maragall 1970: 23).

Actualmente estos anhelos vagos de reconocimiento de la pluralidad lingüística española podrían convertirse en proyectos políticos inmediatos, quizás más factibles después de la vuelta del PSOE al poder central español. Desconocemos, sin embargo, el alcance y la profundidad de lo que Rodríguez Zapatero ha denominado la España plural. Quiero señalar dos iniciativas recientes hacia esta España plural, ambas de origen catalán.

Por una parte la reivindicación del uso extraterritorial del catalán forma del pacto de coalición PSC/ERC/ICV que ha dado lugar al actual gobierno autónomo catalán, denominado catalanista y de izquierdas. Dicho acuerdo (*Acord per a un govern catalanista i d'esquerres*, 14.12.2003) establece lo siguiente:

En cuanto al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y de sus aspectos simbólicos y culturales, las partes adoptarán las iniciativas legislativas y políticas necesarias para:

- Incorporar al curriculum estatal en todos los niveles de la enseñanza obligatoria las materias que expresen la diversidad cultural y lingüística.
- Tomar las iniciativas políticas y legales que lleven al reconocimiento de la realidad plurilingüística del Estado en su denominación oficial, en los registros públicos, en la emisión de moneda y sellos, el DNI y el pasaporte y el etiquetaje de productos.
- Promover la declaración del catalán y del resto de lenguas del Estado como lenguas cooficiales en todo su territorio y su declaración como lenguas oficiales de la Unión Europea. [Como ha observado oportunamente Branchadell (2004a) la formulación más correcta sería “en los órganos centrales del estado”.]
- Impulsar por vía legislativa y política la creación de un Consejo de Culturas, encargado de llevar a cabo las funciones previstas en el artículo 149.2 CE,⁴ y al cual se irán transfiriendo estas funciones por parte del gobierno del Estado.⁵

4 Dicho artículo establece: “Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.”

5 En esta línea, el 08.10.2004, se celebró una reunión en *el Institut d'Estudis Catalans*, para preparar una propuesta de *Ley de Lenguas* estatal.

- Establecer el requisito de uso de las distintas lenguas cooficiales en las condiciones de las concesiones administrativas para la comunicación audiovisual.
- Fomentar por parte de la *Generalitat* la actividad cultural en las lenguas reconocidas en el EAC.

Por otra parte, una organización activista, Organización por el Multilingüismo (OM), tiene como objetivo precisamente lograr un reconocimiento y un uso multilingüe por parte de las instituciones comunes españolas. Dicha organización ha organizado campañas para lograr que los sellos españoles, que las monedas y billetes de euro, que la administración de correos, que la documentación estatal, que la misma Corona española, reflejen el cuatrilingüismo de los ciudadanos. Sus campañas se basan en una exposición pedagógica muy prolija y detallada de los usos oficiales multilingües en estados como Finlandia, Bélgica, Nueva Zelanda, Suiza o Canadá. Hasta ahora, a lo sumo, lo que ha logrado esta organización es una toma de conciencia de la necesidad de multilingüismo. No lograron que los euros reflejaran el multilingüismo español y no lograron impedir que Correos y Telégrafos (usado de forma bilingüe) se transformará en el actual logotipo unilingüe en castellano: Correos.

7. La reivindicación de extraterritorialidad para las lenguas no castellanas: hacia una igualdad radical

El camino hacia un plurilingüismo estatal no está impuesto, pero tampoco prohibido por nuestro marco legal. Quizás este trecho sea lento, como lo fue, por ejemplo, el reconocimiento estatal del neerlandés o flamenco en Bélgica, o el del sueco y el finlandés en Finlandia o el del francés en Canadá. Como ya preveía Miquel Siguan en 1992 continuará habiendo una presión, sobre todo por parte de Cataluña, para el reconocimiento del plurilingüismo tanto en el conjunto del estado como en los organismos europeos (Milian i Massana 2003).

Sin embargo no existe aun un proyecto político coherente sobre el desarrollo futuro del Estado de las Autonomías y de sus correlatos sociolingüísticos. Ahora nos limitaremos a presentar un horizonte próximo hacia el cual creo que tendría que aproximarse España para ser un país más respetuoso y generoso para con su diversidad interna. En primer lugar describiré, someramente, la experiencia internacional

más exitosa: el caso suizo. En segundo lugar desarrollaré algunas propuestas para un desarrollo plurilingüístico en el caso español.

7.1 El caso suizo. *¿Una experiencia única?*

La tradición plurilingüe suiza es fruto de un lento proceso de acumulación de experiencia, del cual pueden extraerse lecciones para el caso español. Siguiendo a la obra clásica de síntesis de McRae (1983) podemos apuntar sus principales características.

En primer lugar, Suiza goza de una tradición histórica peculiar en la que se han desarrollado técnicas de neutralidad, mediación y descentralización.

En segundo lugar, en cuanto a la estructura social y económica, las comunidades lingüísticas helvéticas tienen y han tenido una acusada estabilidad, gracias a la política estricta de territorialidad en los cantones, incluso en los cantones bilingües o multilingües. La visibilidad de la diversidad lingüística es tan elevada en Suiza que “los niños suizos creen que las comunidades lingüísticas son más iguales de lo que son” (McRae 1983: 233).

En tercer lugar, en cuanto a las actitudes y valores, una socialización política peculiar ha logrado que haya profundas simpatías entre los miembros de los distintos grupos lingüísticos suizos. Esta simpatía contrasta con los viejos estereotipos existentes en España, donde muchos y muchas catalanohablantes son tachados de *polacos*. Los temas lingüísticos pueden emergir y emergen en la vida política suiza pero no se acumulan. Esto es fruto de una continua vigilancia y esfuerzo por parte de las élites y por parte de muchos millares de ciudadanos suizos activos.

En cuarto lugar las instituciones políticas y legales suizas tienen las siguientes características: (1) hay un reconocimiento de la igualdad formal entre las distintas lenguas; (2) hay una participación de las minorías en el gobierno confederal, ajustada e incluso superior a su peso específico; (3) se reducen las disparidades económicas entre las distintas zonas por medios directos e indirectos; y (4) existe una profunda autonomía cultural mediante la descentralización.

En quinto lugar, *last but not least*, hay una política decidida de promoción de la comprensión y comunicación a través de las fronteras lingüísticas. Esta política se concreta en requisitos de bilingüismo

funcional entre funcionarios y jueces, en la posibilidad de visión de las distintas cadenas de televisión en todo el territorio, y en la organización Pro Helvetia (Fundación Suiza para la Cultura), que difunde la cultura vehiculada en todas las lenguas del país.

7.2 Propuestas plurilingüísticas para un horizonte próximo en España

¿Cómo llegar la unidad desde lo múltiple? ¿Cómo conciliar el intercambio y la cohesión? Éste es un dilema de la mayoría de estados, dado que hay como mínimo 5.000 lenguas y unos 200 estados en el planeta.

McRae analizó estados plurilingües occidentales: prósperos, con un reconocimiento de su diversidad y con niveles de violencia bajos: la Confederación Helvética, Bélgica, Finlandia y su nativo Canadá. Creemos que España tendría que añadirse a esta lista, a pesar de cierta violencia en y desde Euskadi.

Antes de presentar propuestas para una mejor regulación española del plurilingüismo, examinaremos brevemente cuál es la regulación vigente.

La Constitución Española otorga tres privilegios para el español. En primer lugar, el español o castellano es lengua oficial única en su territorio histórico. En segundo lugar, el castellano es lengua oficial también en el territorio histórico de las otras lenguas y, en tercer lugar, el castellano tiene la oficialidad exclusiva en los órganos centrales del Estado (legislativos, ejecutivos y judiciales).

Los principios de la igualdad lingüística en los espacios políticos compartidos (la Unión Europea, por ejemplo) son más o menos la inversión de estos tres privilegios del español a que acabamos de referirnos. En primer lugar se respeta la primacía funcional de cada lengua en su territorio (como lengua común de uso público). En segundo lugar hay simetría de los derechos personales extraterritoriales (por ejemplo los catalanohablantes tendrían derechos lingüísticos en Madrid, del mismo modo que los castellanoahablantes tienen en los países de lengua catalana) y, en tercer lugar, hay igualdad estricta de derechos lingüísticos en las instituciones políticas comunes.

No se ha llevado a cabo aun un examen sistemático del plurilingüismo en España. Esta revisión tendría que responder a las preguntas claves de McRae (1994: 78): ¿quién decide qué comunicaciones se

han de realizar en una u otra lengua?, ¿quién recibe qué en cuestiones lingüísticas?, ¿cómo se dan estos servicios?, ¿qué servicios tienen que ser proporcionados en cada lengua?, ¿en qué versión de la lengua seleccionada se prestan estos servicios?

Sólo una organización, *Organización por el Multilingüismo*, intenta que el plurilingüismo del Estado sea un problema, sobre todo desde Cataluña, zona más avanzada.⁶

Hay que plantearse una pregunta previa: ¿Hay condiciones para el diálogo? Como señala Marí hay que lograr un marco satisfactorio de debate político. Para empezar hay que evidenciar de manera continuada las desigualdades del marco actual y legitimar la necesidad de la igualdad formal y de una reparación de los efectos de la larga desigualdad.

En primer lugar se tendría que concretar un horizonte plurilingüe justo y satisfactorio para la mayoría. Como señala Marí (2004)

en ausencia de un referente ampliamente conocido de ordenación justa del plurilingüismo, es muy fácil que cualquier pequeño adelanto en el uso de las lenguas en algún organismo estatal, el plurilingüismo en el Senado, por ejemplo, se presente como un techo de magnanimidad insuperable. Hasta ahora ha sido muy cómodo para los poderes estatales que nunca se haya cuestionado seriamente la desigualdad del modelo, que nunca hayan tenido que explicar y justificar el plurilingüismo desigual que practican (Marí 2004).

Desarrollo mis propuestas en tres aspectos: los aspectos institucionales, los aspectos simbólicos y los aspectos que denomino culturales.

7.2.1 Los aspectos institucionales

En primer lugar es imprescindible revisar la legislación vigente, tanto de Derecho Privado como de Derecho Público para formular propuestas de modificaciones legislativas acordes con el pluralismo lingüístico. En segundo lugar se tendría que aspirar a garantizar el derecho a ser atendido en la lengua de elección del ciudadano. Los organismos

6 Los objetivos de OM son los siguientes: a) adelantar en el pleno reconocimiento político e institucional de la pluralidad lingüística del Estado español; b) defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos del Estado español en un marco de pluralismo igualitario; y c) promover la lengua catalana dentro y fuera de su territorio histórico, y colaborar con asociaciones afines en la promoción de las otras lenguas del Estado diferentes del castellano dentro y fuera de su territorio histórico.

dependientes del Estado en territorios autónomos con doble oficialidad han de aplicarla pero como establece la *STC 82/1986* en su FJ5 corresponde a “la Administración estatal la ordenación concreta de la puesta en práctica de aquella regulación legal en la medida que afecte a órganos propios.” Finalmente otra sentencia citada reiteradamente (*STC 82/1986*) en su FJ 8 establece que a cada poder público le corresponde concretar “gradualmente” la atención a los ciudadanos de acuerdo con las posibilidades y los criterios organizativos. Si repasamos los distintos organismos gubernamentales veremos que esta gradualidad se aplica de modos muy distintos sin que se pueda observar un diseño sociolingüístico global por parte de la administración central. Examinemos, para ejemplificar este desorden, la situación sociolingüística de distintas administraciones estatales.

- a) En cuanto a la administración general del Estado, la *Ley 30/92*, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común regula las administraciones públicas de tal manera que establece que los procedimientos puedan ser en las lenguas cooficiales. Sin embargo, el Estado no pone los medios para hacer posible esta medida. Ni los textos ni los formularios ni las páginas web de los distintos ministerios se hallan en las lenguas oficiales. En cuanto a los requerimientos lingüísticos de plazas en determinados puestos de trabajo en la Administración periférica del Estado, la Orden del 20.07.1990 del Ministerio de las Administraciones Públicas referida a la provisión de determinados puestos de trabajo en la Administración periférica del Estado, en relación con el conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas, especifica que dichos conocimientos serán un mérito en los lugares de información al público, de recepción y registro de documentos y en general de proximidad al público.
- b) En cuanto a la administración de justicia, la *Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985*, modificada por la *Ley 16/1994* establece que los conocimientos de la lengua oficial serán un mérito y no un requisito. En cuanto al ministerio fiscal no se establecen méritos lingüísticos; en cambio, para jueces y magistrados el conocimiento lingüístico es un mérito preferente. Estas mínimas exigencias en el campo jurídico contrastan extraordinariamente con la exigencia

universal de conocer el catalán en la enseñanza no universitaria. El resultado es que en Cataluña actualmente sólo un 6% de las sentencias se dictan en catalán.

- c) En cuanto a otras agencias de la administración central del Estado como las Oficinas de Loterías y Apuestas, Muface, la UNED, la administración tributaria, Renfe y Aneca, por ejemplo, hay un bilingüismo no siempre sistemático y a menudo un monolingüismo exclusivo en castellano. Las campañas de publicidad del Ministerio de Sanidad contra el sida o del Ministerio del Interior contra la accidentalidad de tránsito son exclusivamente en castellano. Las publicaciones de los distintos ministerios del gobierno central son también casi exclusivamente en castellano. En el ámbito educativo se tendría que asegurar el reconocimiento del carácter plurinacional y plurilingüístico en los currículums nacionales. Particularmente se tendría que estimular la creación de departamentos de las distintas lenguas del Estado, sobre todo en las Facultades de Filología, de Traducción e Interpretación, de Educación y en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo en la Radiotelevisión pública española, las lenguas no castellanas podrían también representar a España en festivales como Eurovisión. Esta falta de política lingüística sistemática se agudiza en los servicios privatizados o semiprivatizados, como Correos (Milian i Massana 2001). En dichos casos, como ha ocurrido en Canadá, la privatización se tendría que realizar teniendo en cuenta el tratamiento del plurilingüismo.
- d) Finalmente, en cuanto a los compromisos internacionales, la regla ha sido el desinterés del Estado en promover la diversidad plurilingüe española de cara al exterior. Así se tendría que incluir, de acuerdo con las comunidades autónomas implicadas, dentro de la acción educativa española en el exterior, la enseñanza de las lenguas y culturas no castellanas. Por ejemplo, tendría que ser España, y no sólo Andorra, quien propusiera la enseñanza del catalán en el Instituto Español en el Principado pirenaico. Asimismo corresponde al Estado garantizar la promoción y difusión de todas las lenguas españolas en el ámbito internacional y, especialmente en el territorio de la Unión Europea, adaptando la organización y funcionamiento del Instituto Cervantes a la realidad plurilingüe española. Afortunadamente actividades como la de hoy muestran

que empezamos a avanzar en este sentido. Tendría que ser España, como propuso en su momento la ministra de Exteriores Ana Palacio (*Avui*, 29.10.2003), quien estableciera canales de colaboración con las minorías vasca y catalana en Francia. Asimismo España, como ha hecho el ministro actual de exteriores Miquel Ángel Moratinos, es quien ha de avalar la solicitud de uso oficial de las lenguas no castellanas en Europa. Lenguas como el catalán, con casi ocho millones de hablantes tendrían que estar incluidas dentro de los programas lingüísticos de movilidad de la Unión Europea. La ausencia de programas previos de preparación de lenguas no castellanas imposibilita o reduce el uso de estas lenguas en la docencia, particularmente en las universidades catalanes, donde el uso del catalán es relativamente alto. Algo parecido ocurre con las nuevas migraciones. Los inmigrantes llegados a territorios no castellano-hablantes han de ser informados apropiadamente de la situación sociolingüística de las tierras que les reciben y han de recibir los medios (cursillos gratuitos pero obligatorios, por ejemplo) de acceder al dominio de las lenguas de la sociedad receptora.

7.2.2 Los aspectos simbólicos

Abogamos por una representación emblemática del carácter plurilingüe del estado, que tendría que verse plasmado en el mismo nombre del Estado, en las monedas y billetes, en los sellos y en cualquier documento de tipo estatal como el DNI, pasaporte, libro de familia, carné de conducción, tarjeta de residencia, en el BOE y en general en las páginas Web. Asimismo, los miembros de la Corona tendrían que hacer un uso proporcionado de las distintas lenguas oficiales.

7.2.3 Los aspectos culturales

Más allá de reglamentaciones más o menos puntillistas del bilingüismo, el reto principal de un estado plurilingüe es fomentar y arraigar una cultura cívica de respeto por este plurilingüismo, a que invita el mismo mandato constitucional. Creemos necesaria, tal como también propone el gobierno tripartito catalán actual, la creación de una agencia del multilingüismo estatal. Esta agencia tendría dos campos de actividad. Por un lado se trataría de coordinar la política lingüística de la administración central del Estado, que como hemos visto, es anár-

quica o inexistente. Por otro lado, y principalmente, se trataría de difundir una visión positiva del plurilingüismo en el interior de la misma población española, empezando por un conocimiento básico de las lenguas españolas no castellanas y, sobre todo, un conocimiento general de la realidad pluricultural y plurilingüe del país. Como es sabido, la situación de las zonas bilingües españolas es vista por la España monolingüe a menudo a través de un filtro de ignorancia, reticencia, molestia o simplemente disgusto. Creemos que una agencia estatal, coordinada con los distintos gobiernos autonómicos correspondientes podría hacer que se establezca una cultura positiva de pluralidad y diversidad lingüísticas. Se trataría de avanzar, siguiendo los pasos de la confederación suiza, hacia un nuevo sentimiento de nosotros, hacia un federalismo de nuevo cuño que tenga en cuenta todas las partes del todo del Estado, tal como son, no tal como alguien establece que tendrían que ser. En esta línea se tendría que elaborar un libro blanco, de modo similar al que el gobierno federal canadiense en los años sesenta encargó a *The Canadian Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism*. En esta línea se tendrían que sugerir actividades de divulgación, fuera y dentro de la escuela, que permitan la difusión de lo que yo denomino multilingüismo banal. El catalán en la vida cotidiana en Mahón, Alcoi o Barcelona es tan normal como “un vaso de agua clara”, en frase famosa enunciada por Jose María Pemán en pleno franquismo. Se trata de que en los medios de comunicación o en el etiquetaje comercial esta vitalidad lingüística se plasme de manera absolutamente ordinaria, sin necesidad de enarbolar ninguna bandera identitaria. La lengua, las lenguas, no son patrimonio de ningún grupo político sino de la sociedad en su conjunto. Una muestra de este multilingüismo banal ya se ha citado en los usos institucionales y simbólicos del Estado, pero va mucho más allá. En una película reciente como *Mar adentro* de Amenábar, el catalán y el gallego aparecen usados con absoluta normalidad por algunos protagonistas. Del mismo modo, en muchos medios de comunicaciones se tendría que reflejar este multilingüismo.

Esta cultura cívica plurilingüe es una manifestación de una cultura federal, bien opuesta a la cultura nacionalista de cualquier tipo. Una cultura federal que en España forzosamente ha de ser asimétrica, porque asimétricas son las diferencias entre las regiones y nacionalidades españolas. Como sintetizaba muy bien Caminal (2002: 37) “la cultura

nacionalista defiende el nosotros, la cultura federal es imposible sin el otro". Y tener en cuenta este otro en la España actual, significa tener en cuenta su diferencia lingüística. Cabe matizar, sin embargo, que las propuestas plurilingüísticas que aquí propongo serían aplicables tanto en una estructura federal como en una regional.

El nacionalismo español desconfía de la solución federal, por sus supuestos efectos centrífugos incontrolables, y los nacionalismos periféricos temen al federalismo por el temor a ser uniformados. En cambio, la federación se crea para asegurar lo que se tiene, la pluralidad de unidades constituyentes y no para destruirlas o disolverlas. Creemos que, entre las tentaciones del jacobinismo y el etnonacionalismo, el federalismo es la mejor forma de compatibilizar la unidad y la diversidad, la mejor forma de regular los conflictos. El primer paso en esta política de reconocimiento de la diferencia lingüística, tendría que darlo la mayoría de matriz cultural castellana, que es la que puede dar las mayores muestras de generosidad, si sabe abandonar el lastre de muchos años o siglos de menosprecio.

En todas estas actividades de impulso al plurilingüismo, el Estado tendría que mantener una posición de respeto a la unidad interna del catalán-valenciano, posición absolutamente congruente con la *STC 75/1997* que considera equivalentes al valenciano y al catalán, y con el decreto de creación de la Academia Valenciana de la Lengua en 1998, que también declara dicha unidad, aunque sea mediante eufemismos (Esteve et al. 2005).

8. Conclusiones

Esta contribución es sobre todo una invitación a empezar a construir, enterrando experiencias ominosas del pasado, una tradición plurilingüe española. Ciertamente ha faltado a menudo la igualdad y la fraternidad en las relaciones interlingüísticas españolas. Ciertamente a menudo ha primado más la impermeabilidad y la imposición que no la solidaridad. Estoy convencido, sin embargo, de que un avance es posible y factible, si se cumplen ciertas condiciones.⁷ Para empezar con-

7 Hay noticias contradictorias. Por un lado fracasó la reforma del reglamento del Congreso que permitirá poder hablar en catalán (*Avui*, 12.09.2007). Por otro lado el Consejo de Ministros aprobó (*El País*, 27.07.2007) el real decreto por el que se crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Esta-

vendría romper con la inercia histórica que hace de las comunidades autónomas valedoras exclusivamente de sus lenguas propias y, por su parte, al gobierno central valedor exclusivo de la lengua castellano-española. Vale la pena recordar que existen, por ejemplo, más de doscientas disposiciones legales que obligan al uso exclusivo o prioritario de la lengua castellana (<<http://www.contrastant.net/llengua/obligatori.htm>>, 20.09.2007). Por un lado las zonas no castellanohablantes tendrían que reconocer al máximo sus minorías de lengua castellana y aceptar el castellano como patrimonio cultural de primer orden, impulsando (como suele ocurrir) una enseñanza de dicha lengua de calidad. Por otro lado, el gobierno central español, los órganos centrales (quizás en el futuro federales) de la administración del Estado, sea en sus servicios periféricos, sea en sus servicios centrales, tendrían que usar y defender como propias las distintas lenguas de España, mediante, si es necesario, algún organismo coordinador (una agencia española para el multilingüismo hispánico, por ejemplo) o mediante una *Ley de Lenguas*. En este sentido, la capital de España tendría que ofrecer más servicios multilingües, como ya ofrece, por ejemplo, el museo Thyssen-Bornemisza.

Esta actuación del gobierno central a favor del multilingüismo ha de partir de una visión positiva de la diversidad cultural y lingüística y de una actitud generosa que puede permitirse el grupo dominante español, el de lengua castellana, si es que llega a entender la pasión y adhesión que despierta un idioma cuando se corre el riesgo de perderlo.

Como consecuencia de la hegemonía social del castellano-español, la población española que no lo tiene como primera lengua seguirá dominándolo con seguridad. Esta población, sin embargo, si quiere mantener la funcionalidad y prestigio de sus lenguas propias, querrá seguir usando su lengua en todos los ámbitos públicos y oficiales posibles, ante las administraciones locales, autonómicas, españolas y europeas que le tengan que asistir y atender. Del mismo modo, en un futuro no tan lejano, quizás todos los europeos sepamos inglés, pero no por esta razón dejaremos de querernos relacionar en nuestra lengua

do y la Oficina para las Lenguas Oficiales, cuya finalidad es garantizar que los ciudadanos de las comunidades autónomas con una lengua oficial propia puedan dirigirse a la Administración General del Estado en dicha lengua.

(alemán, estonio, castellano-español, danés o catalán-valenciano) con la administración europea. Creemos que un buen modelo lingüístico para los órganos centrales de la administración española es la administración helvética. En ella, el francés con un 20% de hablantes o el italiano con apenas un 5% son reconocidos como lenguas oficiales, mientras que el romanche, que no llega al 1% es considerado lengua nacional. Quizás más que los reglamentos plurilingües helvéticos, que no son trasplantables fácilmente al caso español, como no lo son sus tradiciones históricas, su estructura social y sus acuerdos constitucionales e institucionales, lo digno de encomio y de adaptación de Suiza es su tradición consolidada de respeto por el plurilingüismo, apuntalada por otra tradición también venerable de pragmatismo y subsidiariedad (McRae 1983; Bickel/Schläpfer 1994; Windish 2002)

McRae, a quien ya hemos citado, se planteaba la pregunta clave (1983): ¿De qué manera puede un país multilingüe conseguir la paz y la justicia lingüística para los distintos grupos (en contacto)? Una convivencia lingüística exitosa en España es posible. Modelos de organización que salvaguarden la continuidad de las lenguas históricas y, a la vez, mantengan los puentes de comunicación intergrupales. España puede ser un modelo.

Se ha de intentar en España superar tanto el centralismo heredado como el independentismo clásico o el constitucionalismo y federalismo tradicionales. Se ha de construir un nuevo modelo en que las soberanías sean limitadas y compartidas. Marí concluía muy bien su análisis del debate por el plurilingüismo y por la plurinacionalidad:

No hay problema catalán, sino problema español: el problema de una nacionalidad hegemónica que se cree en el derecho (y además democrático) de decidir cuál es la nación, la cultura y la lengua de los otros. ¿Por qué la ciudadanía española no podría ser, como la europea, compatible con las diversas opciones lingüísticas, culturales y nacionales? (Marí 2004).

Si fracasan estos intentos de pluralismo español en el debate territorial, una parte de la población puede llegar a la conclusión que mejor que cambiar al Estado, sería cambiar de Estado, cruzar la raya que conduciría a la independencia. Como ha quedado (supongo) claro, en este texto, aquí se propone llegar a esta raya y quedarse ahí.

Hemos de continuar construyendo nuestra propia tradición plurilingüe. La aprobación el 05.10.2004, por parte de las Cortes generales de una proposición no de ley en pro del plurilingüismo estatal apunta a

que el gobierno empieza en trabajar en la dirección apropiada. Esperemos que estas bellas palabras aprobadas por sus señorías hace menos de tres semanas no caigan en el olvido, como una proposición no de ley aprobada en 1997.

Bibliografía

- Acord per a un govern catalanista i d'esquerres*, 14.12.2003. <http://www.esquerra.cat/web_nova/arxius/pactedeltinell.pdf> (29.10.2007).
- Alv  rez Junco, Jos   (2002): *Mater dolorosa. La idea de Espa  a en el siglo XIX*. Madrid: Taurus.
- Anderson, Benedict (1983): *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Barrera, Andr  s (2004): “‘La diversidad de lenguas en Espa  a en los   ltimos 25 a  os. Perspectivas desde territorio monoling  e’”. Comunicaci  n en la 2a Trobada Transdisciplin  ria ‘La Constituci   Espanyola de 1978’ (07.05.2004), organizada por el Centre Universitari de Socioling  stica i Comunicaci  ”. En: *Llengua, Societat i Comunicaci  * (LSC). En: <<http://www.ub.edu/cusc>> (20.09.2007).
- Bastardas, Albert/Boix, Emili (eds.) (1994): *  Un estado, una lengua? La organizaci  n pol  tica de la diversidad ling  stica*. Barcelona: Octaedro.
- Bellver, Carme (2005): “Pluralitat ling  stica i llengua catalana”. En: *Llengua i   s*, 32, pp. 49-57.
- Bickel, Hans/Schl  pfer, Robert (eds.) (1994): *Mehrsprachigkeit – eine Herausforderung*. Aarau: Verlag Sauerl  nder.
- Boix-Fuster, Emili (2004a): “‘Les lleng  es en els   rgans centrals de l’Estat espanyol, un balan   de 25 anys de la Constituci   Espanyola’”. Comunicaci  n en la 2a Trobada Transdisciplin  ria ‘La Constituci   Espanyola de 1978’ (07.05.2004), organizada por el Centre Universitari de Socioling  stica i Comunicaci  ”. En: *Llengua, Societat i Comunicaci  * (LSC). En: <<http://www.ub.edu/cusc>> (20.09.2007).
- (2004b): “Las lenguas en los   rganos centrales del Estado espa  ol (un balance de los 25 a  os de la Constituci  n Espa  ola)”. En: *Revista de Llengua i Dret*, 41, pp. 195-217.
- Branchadell, Albert (2005): “Ahora, Espa  a”. En: *El Pa  s* (29.03.2005).
- (2003): “Algunes propostes de promoci   del catal  . El cas de les institucions de l’Estat i el sector privat”. En: *Idees*, 18, pp. 32-45.
- (2004a): “La gesti   de la diversitat ling  stica”. Conferencia (manuscrito in  dito), 17.02.2004.
- (2004b): “‘La regulaci   constitucional del multiling  isme a Espanya: qui vol canviar qu  ’”. Comunicaci  n en la 2a Trobada Transdisciplin  ria ‘La Constituci   Espanyola de 1978’ (07.05.2004), organizada por el Centre Universitari de Socioling  stica i Comunicaci  ”. En: *Llengua, Societat i Comunicaci  * (LSC). En: <<http://www.ub.edu/cusc>> (20.09.2007).

- Caminal, Miquel (2002): *El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional*. Barcelona: Paidós.
- Cano, María Antonia et al. (eds.) (2002): *Les claus del canvi lingüístic*. Alicante: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
- Castro, Américo (1930): *Al volver d Barcelona. Cataluña ante España*. En: *La Gaceta Literaria*, pp. 293-297.
- Cirici Pellicer, Alexandre (1983): "Diálogo". En: *Relaciones de las culturas castellana y catalana. Encuentro de intelectuales, Sitges, 20-22 de diciembre de 1981*. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 166-169.
- Cruz, Juan (2005): "Catalanes". En: *El País* (29.09.2005).
- Espriu, Salvador (1968): *La pell de brau*. Barcelona: Ediciones 62.
- Esteve, Francesc et al. (2005): *El nom, la unitat i la normalitat*. Barcelona: Observatori de la Llengua.
- Fishman, Joshua A. (1991): *Reversing Language Shift*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Fuster, Joan (1962): "Introducció a l'obra de Salvador Espriu". En: Espriu, Salvador: *Obra Poètica*. Barcelona: Santiago Albertí, pp. LX-LXI.
- González Ollé, Fernando (1993): "Tradicionalistas y progresistas ante la diversidad idiomática de España". En: Abreu, María Fernanda de (ed.): *Lenguas de España, lenguas de Europa*. Madrid: Fundación Canovas del Castillo, pp. 129-160.
- Laguna, Martín (1836): *Resumen de Historia Universal*. Barcelona: Librería de José Solá.
- Linz, Juan José (1975): "Politics in a Multilingual Society with a Dominant World Language: the Case of Spain". En: Savard, Jean Guy/Vegneault, Richard (eds.): *Multilingual Political Systems, Problems and Solutions*. Québec: Les Presses de l'Université Laval.
- (ed.) (1984): *España, un presente para el futuro*. Madrid: Instituto de Estudios Avanzados.
- Maragall, Joan (1970): "Oda a Espanya". En: Maragall, Joan: *Obres completes*. Barcelona: Selecta, pp. 171-172.
- Marcos Marín, Francisco (1995): *Conceptos básicos de política lingüística para España*. Madrid: FAES (Fundación para el análisis y los estudios sociales).
- Marí, Isidor (2004): "'Cinc qüestions entorn el multilingüisme estatal'. Comunicació en la 2a Trobada Transdisciplinària 'La Constitució Espanyola de 1978' (07.05.2004), organizada por el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació". En: *Llengua, Societat i Comunicació* (LSC). En: <<http://www.ub.edu/cusc>> (20.09.2007).
- McRae, Kenneth D. (1983): *Conflict and Compromise in Multilingual Societies. Switzerland*. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
- (1994): "El establecimiento de una política lingüística en sociedades plurilingües: cinco dimensiones cruciales". En: Bastardas, Albert/Boix, Emili (eds.): *¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística*. Barcelona: Octaedro, pp. 75-98.

- Milian i Massana, Antoni (2001): *Público y privado en la normalización lingüística. Cuatro estudios sobre derechos lingüísticos*. Barcelona: Atelier. Institut d'Estudis Autònoms.
- (2003): *La igualtat de les llengües a les institucions de la Unió Europea. Mite o realitat?*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Mill, John Stuart: ([1861] 1947): *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. Ed. Lindsay, Alexander Dunlop. London/New York: J. M. Dent/E. P. Dutton.
- Ninyoles, Rafael Lluís (1977): *Cuatro lenguas para un estado*. Madrid: Cambio 16.
- Pons, Eva/Vila, F. Xavier (2005): *Informe sobre la llengua catalana*. Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana.
- Prat de la Riba, Enric (1918): *Per la llengua catalana*. Barcelona: Publicacions de La Revista.
- Reixach, Modest (1975): *La llengua del poble*. Barcelona: Nova Terra.
- Requejo, Ferran (2004): *Pluralisme i autogovern al món. Per unes democràcies de qualitat*. Vic: Eumo.
- Siguan, Miquel (1992): *España plurilingüe*. Madrid: Alianza.
- Turell, Maria.Teresa (ed.) (2001): *Multilingualism in Spain*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Vernet, Jaume (2003): *Dret lingüístic*. Valls: Cossetània Edicions.
- Windish, Uli (2002): "Multilinguisme et plurilinguisme: le cas suisse". En: Lacorne, Denise/Judt, Tony (eds.): *La politique de Babel. Du monolinguisme d'État au monolinguisme des peuples*. Paris: Karthala, pp. 227-253.
- Woolard, Kathryn A. (2004): "Les ideologies lingüístiques: una visió general d'un camp des de l'antropologia lingüística", 13.12.04, XII Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona [manuscrito inédito].